

Restablecer la justicia sin destruir el mundo

ES innegable que España está profundamente agitada por el síndrome de la corrupción. El número y gravedad de los casos denunciados, la convicción de que han delinquido instancias tan relevantes como el gobernador del Banco de España, el director de la Guardia Civil, la directora del «BOE» y el sindicato UGT justifican la psicosis que nos atormenta. Por otra parte, la lentitud de la justicia, la inoperancia de las comisiones de investigación y el alanceamiento de los periodistas que denuncian nuevos casos contribuyen a espesar el ambiente y a hacerlo irrespirable. Nadie parece estar libre de sospecha y en grandes sectores de la sociedad se ha instalado el sentimiento de que un gran jurado popular debe hacer llover del cielo un fuego purificador que arrase los cimientos de la nueva Gomorra.

Ante este preocupante estado de hechos y opiniones, nos hemos impuesto la obligación de reflexionar colectivamente sobre el tratamiento menos injusto y menos inconveniente de la situación. Las proposiciones siguientes y sus acotaciones éticas sustancian y matizan la postura de RAZÓN Y FE:

1.ª La corrupción, en los estados modernos, es en parte inevitable. La corrupción se instala inevitablemente en todas

aquellas parcelas en las que hay algo que ganar o alguna ventaja que obtener. Estadísticamente se demuestra que siempre hay un porcentaje de pícaros o pillos dispuestos a engrasar los engranajes, a ocultar o apropiarse de información, a ejercer el poder de su cargo o su dinero en beneficio propio y a impedir la transparencia. El modelo de economía mixta, en el que casi el 50 por 100 del PIB es administrado por el Estado, traslada al ámbito público la irremediabilidad estadística de la corrupción. En este sentido se manifestó recientemente **Alain Touraine**, el prestigioso analista francés. El caso de España no es esencialmente diferente del de otros países: basta recorrer los anuarios para descubrir equivalencias en Japón, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Grecia, etc... Es triste comprobar la impotencia, pero sería ingenuo y peligroso seguir creyendo que se puede alejar del todo los fantasmas.

ACOTACIÓN ética. La inevitabilidad de un mal nunca puede eximirnos de la obligación de combatirlo. La clase política asume con el cargo el ineludible imperativo social de elaborar mecanismos para dificultar la actuación de los corruptos. Entre estos mecanismos, debe plantearse el de despojarse de ser gestora directa de no pocas parcelas cuya gestión asume actualmente. Cuanto más estatalizada está la economía, mayor es el volumen de la corrupción; allí donde la economía estuvo enteramente estatalizada (antiguos países comunistas), la corrupción se instaló con carácter casi universal. El énfasis del Estado no debe ponerse en ser gestor, sino vigilante de la legalidad y transparencia.

2.ª Es necesario considerar la corrupción como un problema grave, pero no como el único problema. Desde hace tres o cuatro años la obsesión por descubrir y castigar la corrupción se ha erigido en la causa noble por excelencia, ha movilizado las mejores plumas y ha convertido a los periodistas en inspectores de policía. Pero el país tiene otros muchos y graves problemas: paro, desindustrialización, falta de productividad, fuertes carencias educativas, desvertebración e insolidaridad territorial, ambigüedad sobre el propio

proyecto colectivo... ¿No corremos el riesgo de no caminar con las piernas por tener las manos sucias? El gobierno parece atezado, encogido, temeroso, sin el vigor de la iniciativa en grandes parcelas. El parlamento no puede dedicar más tiempo a las comisiones de investigación particular que a sus tareas esenciales de legislar y controlar la actuación del Ejecutivo. Todo el país consume sus mejores energías y su mayor tiempo en lavarse las manos.

ACOTACIÓN ética. *El miedo a ser aplastado por las irregularidades no puede convertirse en un opiáceo que prive de dinamismo ni a la sociedad ni a sus estamentos dirigentes. La inacción preserva, desde luego, del error y la condena, pero puede ser una forma de corrupción tan grave como las denunciadas.*

3.ª El viento purificador no debe arrasar las instituciones. *Manuel Fraga se ha atrevido a proponer una especie de pacto razonable para atacar el problema de la corrupción sin crear otro mayor, como sería la pérdida irrecuperable de confianza en las instituciones. El modelo italiano es una perspectiva nefasta: la operación **manos limpias** no sólo ha barrido del horizonte a Craxi, sino al propio Partido Socialista; no sólo ha procesado a Andreotti, sino que ha herido de muerte a la misma Democracia Cristiana y ha llevado efímeramente al gobierno a un Berlusconi, aquejado de los mismos vicios que se pretendía combatir. El modelo francés, menos justiciero, resulta moralmente preferible: hay varios ministros procesados, se ha embargado a Tapie, se ha descalificado a personas, pero el Parlamento y los partidos —pilares del sistema democrático— siguen gozando de la confianza del ciudadano.*

ACOTACIÓN ética. *Los moralistas del racionalismo y del utilitarismo condenaron con todo fundamento este instinto vengador que se expresa en la máxima «**fiat iustitia, pereat mundus**». Es obligado adherirse a esa descalificación de todo milenarismo moral, que exige destruir el orden para instaurar uno nuevo, que nacerá con las mismas probabilidades de corromperse que el*

orden que se pretende aniquilar. La democracia es un bien y una garantía imperfecta, pero de categoría moral menos mala que su ausencia. Cualquier crecimiento de la desafección colectiva hacia las instituciones democráticas constituye un germen de males mayores que la tasa irremediable de corrupción que comporta.

4.ª No es justo acusar sólo en dirección del poder. El caso Palomino es paradigmático. Este señor ha tenido la suerte o la desgracia de disfrutar de la sombra de su pariente González y otros le han comprado un lugar en esa sombra. Nuestro dedo justiciero tiende a ensañarse con el poseedor de la sombra y no con el comprador corrupto de una parcela de ella. Lo mismo puede decirse de los constructores que pagan mordidas incluso cuando nadie se las pide, de los que regalan chalets para garantizarse un hueco en posteriores contrata, de los que elaboran informes favorables a quienes suponen cercanos al poder, de quienes dan cátedras a los vinculados al sistema. Todos ellos pagan de algún modo el precio invisible de la corrupción y mercadean con bienes públicos para de algún modo garantizarse su disfrute privilegiado.

ACOTACIÓN ética. En las misiones populares los predicadores pretendían moralizar a los clientes de las prostitutas con aquella —quizá zafia, pero eficaz— interrogación: ¿quién es más culpable, la que cobra por pecar o el que paga por pecar? Antes de lanzar nuestras diatribas contra el gobierno, el presidente, los partidos o la Administración, deberíamos apuntar hacia las responsabilidades externas, hacia el cuerpo social del que todos formamos parte. No habría corruptos si no hubiera corrompedores.

5.ª El remedio de la corrupción política tiene que tener componentes políticos. Predicar, motejar, denunciar son desencadenantes de una cirugía que sólo los políticos podrán efectuar. Si la financiación de los partidos es una parcela oscura, sólo una nueva ley de financiación podrá clarificarla. Es imperiosamente necesaria una ley en la que se concentre el número de elecciones, se impongan drásticos topes a los gastos

de campaña, se controle a los bancos que facilitan exorbitantes créditos sin garantía o condonan graciosamente las deudas. Urge también el que a los «hacedores de bien», como las cooperativas, se les someta a derecho y control. Urgen reglamentaciones precisas que marquen los cauces de contratación. Urgen defensores del pueblo que no se limiten a presentar un informe sobre las quejas recibidas.

ACOTACIÓN ética. *La regeneración moral de nuestro país no podrá hacerse sólo mediante recomendaciones a empresarios y trabajadores. Los mecanismos de regeneración contienen una ineludible dimensión política y exigen medidas técnicas en leyes precisas, en reformas del Código Penal que tipifiquen los nuevos delitos y en sanciones ejemplarizantes. El derecho, como brazo de la justicia, debe expresarse meridianamente para que todos nos sintamos protegidos por él. La actual situación en que es frecuente aceptar que determinada acción «es inmoral, pero no delictiva» debe terminar cuanto antes.*

6.ª La amplitud de la corrupción tiene sus raíces más profundas en la educación. *Hemos asumido acriticamente una jerarquía perversa de valores. Hemos desterrado los imperativos éticos de carácter absoluto. Hemos disuelto la responsabilidad individual de la delincuencia en las carencias sociales o en imponderables genéticos. Hemos aceptado insensiblemente el maquiavélico principio de que el éxito valida la acción. Hemos erigido como modelos a los triunfadores y no a los honrados. Hemos soplado insensatamente sobre los instintos, sin someterlos al control de la razón práctica universal. Hemos alabado a los que construían la cultura del pelotazo. Hemos asistido sin pestañear a la evaporación de una moral de raíz religiosa sin estar seguros de que era sustituida por otra, no menos exigente, de raíz racional. Hemos desdeñado la represión de conductas y creado una cultura de permisividad exagerada. ¿Podemos sorprendernos de que tales polvos trajeran estos lodos?*

ACOTACIÓN ética. *Urge un pacto educativo nacional en el que nos pongamos de acuerdo todos,*

no sólo sobre los contenidos de la educación, sino también sobre la axiología moral, sobre una jerarquía de valores en la que tenga primacía la honradez, sobre un esquema de clarificación simplificada entre lo que está moralmente prohibido, lo que es indiferente y lo que es excelente, sobre la coonestación de lo que se debe hacer y la tolerancia. Nuestras escuelas cumplen razonablemente bien su función instructiva, pero son terriblemente deficientes en su función formativa.

***ESTAS** reflexiones deberían producir esquemas de actuación, unas veces de efecto inmediato y otras de efecto retardado que nos condujeran a afrontar el problema de erradicar la corrupción como un reto en el que ninguna persona ni institución puede permanecer al margen.*